CAPITULO IV

COMBUSTIBLES

SECCION I. Generalidades

De la investigación de este apartado ante todo es posible dilucidar la existencia de múltiples organismos de la Administración Pública que tienen ingerencia en el asunto. Algunos de ellos son: la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible del MIRENEM, RECOPE, el Cuerpo de Bomberos, en específico, y por su ámbito de atribuciones generales el Consejo de Seguridad, Oficina de Seguridad e Higiene del Trabajo y la Inspección del Trabajo del MTSS, Autoridades de Policía, Tránsito, Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT.

1) Decreto Ejecutivo N° 19164-MIRENEM-MEIC-TSS del 1° de Agosto de 1989 y sus reformas. Creación de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible.

Es emitido con fundamento en la importancia que tienen para la economía y seguridad nacional las actividades de transporte y comercialización de combustible por medio de las estaciones de servicio y la conveniencia de que sea una sola institución competente la encargada de dirigir, regular y vigilar su desempeño.

Crea la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible, adscrita al MIRENEM. Sus funciones básicas serán la emisión de recomendaciones para la instalación de nuevos expendios, así como la remodelación de los existentes, control de los aspectos de seguridad e higiene en su operación y funcionamiento, y lo relativo al transporte de los derivados del petróleo. En tal sentido, y de conformidad con el numeral quinto, esta dirección será la encargada de tramitar, estudiar y aprobar o improbar las solicitudes para instalar y operar nuevas estaciones de servicio, y en su caso cancelar la operación de las estaciones de servicio que así se requiera por solicitud de sus propietarios o por razones comprobadas de seguridad o conveniencia nacional.

Este decreto norma acerca de las funciones que tendrá la Dirección en cuanto al transporte de derivados del petróleo, disponiendo en tal sentido, que le corresponderá:

- a) Recibir y tramitar las solicitudes, así como remitir la recomendación ante el MIRENEM para el otorgamiento para el otorgamiento de nuevas autorizaciones o para la renovación de las existentes;
- b) Determinar la especialización del transporte de derivados de petróleo en función de productos "limpios o sucios".

Por la naturaleza de sus labores mantienen relaciones interinstitucionales con: Ingeniería de Tránsito del MOPT y el INVU.

2) Ley N° 6588 del 30 de julio de 1981, publicada en la Gaceta del 13 de agosto de 1981. Regulación de la Refinería Costarricense de Petróleo S.A.

Dispone que RECOPE S.A. está sujeta a las regulaciones de esta ley y a aquellas disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias que no estén en contradicción con ella.

Los objetivos de esta entidad serán los de refinar, transportar, comercializar a granel el petróleo y sus derivados, mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para ello y ejercer los planes de desarrollo del sector energía, conforme al Plan Nacional de Desarrollo.

De la visita efectuada a funcionarios de esta organización, logró determinarse que la institución se compone de los siguientes planteles de distribución:

<u>Plantel</u>	<u>Ubicación</u>
Refinería	Moín (Limón)
Plantel Turrialba	Turrialba
Plantel El Alto	Ochomogo (Cartago)
Plantel Aeropuerto	Aeropuerto (Alajuela)
Plantel La Garita	La Garita (Alajuela)
Plantel Cocal	Puntarenas
Plantel Asfalto	Puntarenas
Plantel Barranca	Puntarenas

3) Decreto N° 14874-MIEM del 29 de septiembre de 1983, publicado en La Gaceta N° 194 de 29 de setiembre de 1983. Reglamento a la Ley N° 6588

El reglamento a esta ley establece y desarrolla varias atribuciones para RECOPE, sobre las políticas de fijación de precios, su coordinación con otras instituciones.

Como objetivos de RECOPE S.A. se dispone el siguiente: "refinar, transportar, comercializar a granel el petróleo y sus derivados; mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para ello y ejercer, en lo que corresponda, los planes de desarrollo del sector energía, conforme al Plan Nacional de Desarrollo".

4) Decreto N° 14430-MIEM-PLAN del 12 de abril de 1983, publicado en La Gaceta del 25 de abril de 1983. Constitución del Sector Industria, Energía y Minas, y su modificación por Decreto N° 15290-MIEM-PLAN del 20 de enero de 1984, publicado en La Gaceta N° 69 del 6 de abril de 1984

Obedece el establecimiento de este sector, según el considerando 4to, a la conveniencia

de agrupar las instituciones, programas y actividades públicas en materia de industria, energía y minas, con el objeto de imprimir un mayor grado de coordinación de eficiencia y eficacia en la Administración y Desarrollo del Sector de Industria, Energía y Minas. RECOPE es integrante de este sector en general y en particular de los subsectores de Energía y de Minas.

5) Ley de Hidrocarburos N°7399, publicada en La Gaceta N° 95 del 18 de mayo de 1994.

Crea la Dirección General de Hidrocarburos como el órgano técnico del MIRENEM a cuyo cargo estarán los trámites y los procedimientos tendientes a formalizar y a ejecutar correctamente los contratos del Poder Ejecutivo suscribirá para la exploración y explotación de los hidrocarburos.

Dentro de sus atribuciones se establece la vigilancia del buen estado de los campos petrolíferos o gasíferos, sus instalaciones y dependencias y tomar las medidas pertinentes para su adecuado mantenimiento.

Aunque el objetivo general de dicha ley es regular, desarrollar, promover y controlar la exploración y la explotación de los depósitos de petróleo y de otras sustancias hidrocarbурadas, también se propone proteger y preservar el ambiente, a través del capítulo noveno de la misma.

Establece este capítulo que toda actividad de exploración y explotación debe cumplir con los requisitos legales y reglamentarios sobre la protección ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables. El MIRENEM, que es el órgano encargado de otorgar las adjudicaciones, condicionará el otorgamiento de las mismas a la aprobación de un estudio del impacto ambiental. El oferente contará con cuatro meses desde la notificación respectiva para la elaboración del mismo.

SECCION II. Importación

La importación de petróleo crudo y derivados a nuestro país se realiza por adquisición de países como México, Venezuela, Ecuador y Colombia. Su transporte se realiza por vía marítima, siendo recibidos en el Puerto de Moín.

En relación con el marco legal, básicamente son dos las normativas que se refieren al tema de la importación de combustibles: la ley 7356 y la ley 5500. La primera de ellas regula lo relativo al monopolio de RECOPE para la importación de petróleo crudo, para satisfacer la demanda nacional; la segunda norma sobre la importación temporal de petróleo.

1) Ley N° 7356 del 24 de agosto de 1993, publicada en la Gaceta N° 170 del 6 de septiembre de 1993. Monopolio en favor del Estado para la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo, sus combustibles, derivados, asfaltos y naftas

Según esta ley, la importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo

y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional, son **monopolio** del Estado, teniendo la concesión de tal monopolio la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. para el desempeño de las actividades de importación, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, en tanto la totalidad de todo el capital accionario de esta Empresa Pública pertenezca al Estado.

2) Decreto N° 14874-MIEM del 29 de septiembre de 1983, publicado en La Gaceta N° 194 del 29 de setiembre de 1983. Reglamento a la Ley N° 6588

Estipula que RECOPE decidirá sobre la importación directa de petróleo que ésta comercialice por parte de terceros.

3) Ley N° 5500 del 28 de marzo de 1974. Ley sobre la importación temporal de petróleo

Esta ley, lleva por objetivo, según su artículo primero, el establecimiento de normas para las actividades de importación temporal de petróleo, que se efectúen con el propósito de:

- a) almacenarlo y transportarlo a través del territorio nacional, por medio de oleoducto e instalaciones conexas, o bien,
- b) almacenarlo e industrializarlo con fines de reexportación.

Dentro de las obligaciones en los contratos de concesión o de operación con el Estado, el concesionario y el contratista, deberá entre otras cargas, adoptar todas las medidas necesarias para la conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales. De llegar a producirse serios daños injustificados al medio ambiente o a los recursos naturales como consecuencia directa o indirecta de las actividades que lleva a cabo el concesionario, éste cubrirá el costo de los trabajos necesarios para subsanar dichos daños, sin perjuicio de pagar al Estado la indemnización que corresponda.

La administración de la presente ley será realizada en representación del estado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la cual se encargará de revisar las solicitudes de los interesados en esta materia. Dentro de los requisitos que tales solicitantes deben cumplir está la descripción de las medidas para evitar la contaminación del medio ambiente y de los recursos natuarles.

Sin embargo, al regular como evaluará el MEIC dichas solicitudes, no establece ningún criterio en relación con las medidas de seguridad descritas en el artículo anterior.

El Poder Ejecutivo podrá reglamentar esta ley contemplando las medidas que sea necesario adoptar en relación con el trasiego de los materiales o productos transportados y para el control de supervisión que es necesario establecer a través del MEIC para la debida y fiel ejecución de los contratos y la prevención de la contaminación ambiental. Consideramos que esta atribución no debería ser facultativa sino obligatoria.

SECCION III. Registro

El registro de las personas físicas o jurídicas que manipulan, comercializan, transportan o realizan actividades relacionadas con combustibles reviste gran importancia, ya que de ello depende la fiscalización posterior que pueden efectuar las instituciones relacionadas con este tema.

El Decreto Ejecutivo número 19164-MIRENEM, no establece regulaciones acerca del registro obligatorio de las Estaciones de Servicio; sin embargo según información suministrada por la Dirección de Comercialización y Transporte de Derivados del Petróleo, esta unidad lleva un expediente para cada estación, información que es cruzada con RECOPE, y que esperan codificar y automatizar.

SECCION IV. Transporte

Los aspectos relacionados con el transporte de combustibles son considerados en el marco general del Reglamento sobre Medidas de Seguridad para el Transporte de Materias Peligrosas, así como en ciertas disposiciones de la Ley de Tránsito. Cabe indicar que esta temática reviste gran trascendencia tratándose de combustibles, debido a que el riesgo de derrames o sucesos similares relacionados con los mismos, según lamentables experiencias en los últimos años, es de los más frecuentes cuando hablamos de materiales peligrosos.

En Costa Rica la mayor cantidad de camiones cisterna chasis y camiones remolque que transportan productos de RECOPE son propiedad de particulares : 296 camiones cisterna (chasis y remolque, de los cuales 133 son camiones chasis y 166 camiones remolque). La capacidad promedio de los camiones chasis es de 2639 galones y de los remolques, 6001 galones.

La vía férrea también se utiliza para el transporte de combustibles, principalmente de búnker. Aproximadamente existen cien carros de este tipo en el país, de los cuales son propietarios, en orden de número, RECOPE, CLAIVESA, Distribuidora de Búnker y FECOSA.

En general remitimos además en cuanto a esta materia a lo manifestado en relación con el transporte de explosivos por parte de la Ley de Tránsito.

A continuación un análisis legal de la normativa más específica en torno a este asunto.

1) Decreto Ejecutivo N° 19164-MIRENEM-MEIC-TSS de 1° de Agosto de 1989 y sus reformas por decretos N° 20589-MIRENEM y N° 22213-MIRENEM, éste último publicado en la Gaceta de 14 de junio de 1993. Creación de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible

A través de este decreto, y sus reformas se establecen una serie de normas que deben seguirse para el trasiego y descarga de combustibles. Además establece las condiciones que debe cumplir el camión transportista y la estación de servicio para lograr tales actividades.

Además establece una serie de conceptos importantes para la mejor comprensión del

tema: entre ellas transportista, distribuidor ambulante o peddler, cisterna, producto sucio o negro, producto limpio, otros hidrocarburos.

El decreto establece que corresponderá a la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible la tramitación de los permisos de transporte de petróleo y derivados, de conformidad con ciertas pautas sobre los vehículos a utilizar y la calibración de los mismos.

El decreto también regula las actividades y requerimientos del distribuidor ambulante de diesel y Kerosene, el cual también se denomina peddler. Este tipo de transportista brinda sus servicios por su cuenta y riesgo, consistiendo tales servicios en la distribución de canfín y diesel en cantidades pequeñas.

2) Ley 6324 del 30 de abril. Ley de Administración Vial

Esta ley regula en forma genérica lo relativo a la administración vial con referencia a las consecuencias ambientales derivadas de la actividad de tránsito.

Específicamente en relación con la Dirección de Ingeniería de Tránsito, ésta tendrá a su cargo el estudio de los problemas de tránsito y de sus consecuencias ambientales y sociales, así como el diseño y la ejecución de medidas y normas técnicas para controlarlas.

La Ley regula con mayor detalle las funciones de esta Dirección, y detalla que le corresponderá, estudiar y analizar las consecuencias ambientales y sociales del tránsito, tales como contaminación y accidentes, y formular estrategias para resolverlas.

Cabe señalar que esta normativa no contempla sanción alguna en relación con quienes transgredan u ocasionen consecuencias ambientales lo cual hubiese resultado muy conveniente a nivel de una legislación que regula tan específica materia.

3) Ley 7399 de 3 de mayo de 1994. Ley de Hidrocarburos

Establece esta legislación que todo contratista de exploración o explotación de hidrocarburos, previa autorización del MIRENEM, tendrá derecho de construir de uno a más oleoductos exclusivamente dedicados a su explotación o la de sus afiliados, y utilizar el sobrante de su capacidad transportadora para acarrear el petróleo de terceros, previo aviso a la Dirección de Hidrocarburos.

El Estado tendrá, sobre terceros, un derecho preferente para el acarreo de sus petróleos; asimismo podrá también construir oleoductos para tales fines de transporte.

Será causal de caducidad el mantenimiento inadecuado de las instalaciones de transporte de hidrocarburos.

SECCION V. Ubicación de instalaciones

1) Decreto Ejecutivo N° 19164-MIRENEM-MEIC-TSS del 1° de agosto de 1989 y sus reformas. Creación de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible

Este decreto establece las condiciones de acceso y requisitos de situación para la construcción de estaciones de servicio señalando entre otras que no podrán realizarse a menos de treinta y cinco metros de distancia, medidos desde el punto más cercano de los linderos de su terrenos, hasta:

- Fábricas o sitios donde se almacenen productos o sustancias explosivas o inflamables;
- Escuelas, colegios y guarderías infantiles;
- Centros de Salud y Asilos de Ancianos;
- Salas de reunión o espectáculos públicos y centros deportivos;
- Cantinas, bares y restaurantes.

SECCION VI. Almacenamiento

El almacenamiento de combustible es un tema de mucha importancia, dado que en virtud del tipo de material y el peligro que representa, las medidas que se tomen al almacenarlos pueden determinar un accidente o prevenirlo.

Según información suministrada por RECOPE S.A. el plantel con mayor capacidad de almacenamiento es Moín, seguido por El Alto y Cocal. El Plantel de Aeropuerto es el que posee menos capacidad y distribuye menos número de productos (Jet Fuel y gasolina de avión).

1) Decreto Ejecutivo N° 19164-MIRENEM-MEIC-TSS del 1° de agosto de 1989 y sus reformas. Creación de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible

Regula acerca de los Tanques de Almacenamiento, Tuberías y Bocas de Llenado, tuberías de instalación, y otras estructuras, especificando todos los requisitos de materiales, capacidad, marca de fabricante y año, revestimiento y otros detalles técnicos y estado general para poder ser utilizados o dejados de usar para esta actividad. Además establece algunas medidas prohibiendo el almacenamiento de otros artículos que puedan ser explosivos o reaccionar con el combustible. El Departamento de Prevención de Riesgos del INS, ha editado publicaciones de medidas técnicas relativas al "Almacenamiento de Combustibles", cuyos destinatarios son principalmente las plantas químicas.

En tal documento y en relación con el debido almacenamiento, se afirma que "los riesgos de incendio, explosión y lesiones del personal pueden ser materialmente reducidos mediante cuidadoso planeamiento de la dirección y entrenamiento del personal".

Los consejos técnicos sobre tales medidas pueden ser consideradas recomendaciones

valiosas para una eventual legislación específica sobre esta área.

2) Ley 7399 de 3 de mayo de 1994. Ley de Hidrocarburos

Regula esta legislación que el contratista de exploración o explotación de hidrocarburos, estará obligado a proveer en sus instalaciones, sin costo para el Estado, el almacenaje por un máximo de treinta días de los hidrocarburos que el estado reciba por concepto de regalía. Vencido este plazo el Estado pagará las tarifas que acuerden las partes y el contratista continuará con la responsabilidad de los hidrocarburos que almacene.

Además será causal de caducidad del contrato de exploración o explotación el mantenimiento inadecuado de las instalaciones de almacenamiento de combustibles.

SECCION VII. Comercialización

1) Decreto Ejecutivo N° 19164-MIRENEM-MEIC-TSS del 1° de agosto de 1989 y sus reformas. Creación de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible

El expendio de combustibles por parte de una estación de servicio, requiere además de los permisos de rigor por parte del INVU y del MS, de la autorización que emite la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible.

Se posibilita la venta de accesorios y artículos para uso de los ocupantes de los vehículos automotores, excepto: plaguicidas, cilindros de gas, productos químicos inflamables o reactivos con hidrocarburos y productos de madera. Asimismo se prohíbe el funcionamiento de talleres de enderezado y pintura en las estaciones de servicio.

El decreto prohíbe el suministro de combustibles a vehículos de transporte colectivo de personas (buses y microbuses), mientras éstas se encuentren en su interior, y en ningún caso se puede servir combustible a vehículos con el motor funcionando. La comercialización de combustibles en envases de vidrio o recipientes abiertos está prohibida.

Si en la actividad de comercialización o suministro de combustible a vehículos automotores se producen derrames, éstos deben ser eliminados antes de encender el motor y poner en marcha el vehículo.

Señala la obligación del propietario o arrendatario de la estación de servicio de mantener en buen estado de seguridad, funcionamiento, limpieza y ornato, las instalaciones, equipo, área de servicio y los alrededores.

En cuanto a la limpieza de la estación de servicio, ésta nunca debe realizarse con gasolina u otras sustancias combustibles o de otra índole que impliquen peligro potencial para clientes o empleados. Para esos mismos efectos, se establece que los locales deben tener por lo menos dos

puertas, dispuestas de tal forma que una de las dos sirva de salida de emergencia. A su vez, el sistema eléctrico debe cumplir con las normas establecidas en el Código Eléctrico Nacional.

Establece regulaciones acerca de la operación y funcionamiento de la estación, los tanques y tuberías y otros asuntos relativos a maquinarias de uso en la estación. Además, en cuanto al personal de la estación, dispone que éste ha de ser uniformado y debe brindar un buen trato al cliente. Es requisito y no obligación, el que este personal "prevenga accidentes e incendios".

Señala que toda estación de servicio deberá contar con elementos de prevención y extinción de incendios en perfecto estado de funcionamiento. Tales instrumentos deben estar en un lugar de visible y de fácil acceso, colocados sobre un cuadro con franjas rojas y blancas, a una altura mínima de 0,50 metros y máxima de 1,20 metros.

Dispone la prohibición absoluta de fumar dentro de las instalaciones, así como el uso de dispositivos de llamas abiertas o sustancias que puedan causar explosión o incendio.

2) Decreto Ejecutivo N° 14874-MIEM del 29 de septiembre de 1983, publicado en La Gaceta N° 194 del 29 de setiembre de 1983. Reglamento a la Ley N° 6588

Según lo establece el decreto. RECOPE podrá comercializar en el extranjero petróleo y sus derivados, fijando las condiciones de venta que se logren llevar a cabo de acuerdo con los mercados internacionales, siempre y cuando el consumo nacional esté garantizado. Además las transacciones que se lleven a cabo al amparo de este artículo deberán ser refrendadas por el SNE.

Además señala que RECOPE en el ejercicio de sus objetivos podrá: comercializar sus productos cualquiera que sea su especie o procedencia tanto en el país como en el extranjero, para lo cual podrá establecer los procedimientos más apropiados para la defensa de sus intereses y del país.

3) Decreto Ejecutivo No. 16171-MIEM del 12 de febrero de 1985. Reglamento al Artículo 443 del Código Fiscal Autorización para la producción y exportación de Alcohol con fines no licoreros

En virtud del numeral primero, regula el otorgamiento de la autorización para la producción y/o exportación de alcohol con fines no licoreros. Tal autorización según el numeral segundo será otorgada por el MIRENEM, luego de un procedimiento definido por el numeral quinto y siguientes.

Los artículos 11 y 12 contienen las denominadas normas ambientales. El primero señala que los titulares de una autorización para la producción y/o exportación de alcohol están obligados a cumplir con todas las normas y requisitos legales y reglamentarios vigentes, sobre la contaminación ambiental y la recuperación de los recursos naturales renovables y sobre las

especificaciones y obligaciones relacionadas con la protección del ambiente. El segundo por su parte, prohíbe toda acción, práctica u operación que deteriore el ambiente natural, de manera que haga inservible sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, para los usos a que están destinados.

La redacción de este numeral es particularmente peligrosa dado que sus previsiones se refieren a las actividades que deterioren el ambiente haciendo inservibles sus elementos básicos, desprotegiendo aquellos que según el mismo numeral no encajen dentro de tales, y permitiendo aquellas acciones cuyo impacto únicamente desmejore los elementos de ambiente.

4) Decreto N° 15.993-MEIC. Normas oficiales para Productos Derivados del Petróleo. Gaceta N° 32 de fecha 14 de febrero de 1985

Como su nombre lo indica este decreto establece las Normas Oficiales para la Calidad de los Combustibles, como gas licuado de alta presión, gasolina automotriz, kerosene, diesel y asfalto. basado en las especificaciones internacionales, los tipos de crudo disponibles, y los avances tecnológicos para adecuar los motores a las características de los combustibles.

5) Decreto N° 21045-MEIC. Requisitos de la melaza para la fermentación alcohólica. Gaceta N° 48 del 9 de marzo de 1995

Esta normativa tiene por objetivo especificar los requisitos que debe cumplir la melaza de caña de azúcar, destinada para la fermentación alcohólica.

6) Decreto N° 21020-MEIC, Metrología. Llenado de tanques usados en el transporte de combustibles. Gaceta 45 de 4 de marzo de 1992

El objetivo de esta normativa reside en garantizar la seguridad metrológica para las transacciones comerciales, basados en volúmenes de hidrocarburos, transportados por medio de cisternas.

SECCION VIII. Uso y Proceso

No se encontraron regulaciones al respecto.

SECCION IX. Desecho

Las consecuencias ambientales y en términos de salud pública que pueden derivarse de una mala disposición de desechos han sido contempladas por la legislación, principalmente en el Decreto 19164-MIRENEM-MEICS-TSS.

A partir de las atribuciones que le otorga la Ley General de Salud, el MS dirigió a RECOPE S.A. disposiciones técnicas acerca de los análisis de laboratorio a efectuar a las aguas residuales de los separadores que se utilizan para tales fines, solicitando además informes

mensuales de los resultados.

Según información suministrada por funcionarios de RECOPE, tenemos conocimiento de que los tanques de almacenamiento en todas las terminales se limpian una vez al año, labor que realiza una firma contratada. Los desechos se ubican en fosas que experimentalmente se cubrían con cal y tierra, pero los resultados no fueron muy deseables. Por ello se ensayan otras técnicas como enzimas y biocidas.

1) Decreto Ejecutivo N° 19164-MIRENEM-MEIC-TSS del 1° de agosto de 1989 y sus reformas. Creación de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible

El decreto establece como requisito para la instalación de una estación de servicio : "El diseño de una 'trampa de grasa' capaz de retener los residuos de contaminación y que deberá ser acorde con la infraestructura de la estación de servicio que se propone".

Además señala que los desechos líquidos derramados accidentalmente, deben ser recogidos y conducidos a un lugar seguro y herméticamente protegido. En ningún caso se deben depositar éstos en vías públicas o lugares no autorizados. Merece considerarse que una materia de tal interés debe ser regulada con mayor detalle y énfasis que en el artículo mencionado.

SECCION X. Exportación

No se encontraron disposiciones sobre esta materia

SECCION XI. Primera respuesta en caso de emergencia

Ciertamente la política de toda institución que labore o realice actividades en las que utilice combustibles, debe ser preventiva y en extremo cuidadosa en su manejo, almacenamiento, transporte y cualquier actividad que los involucre, por la condición misma de este tipo de materiales.

No obstante lo anterior y siempre dentro de la política de prevención, es muy recomendable la existencia de medidas destinadas a una Primera Respuesta en Caso de Emergencia. En tal sentido el Departamento de Protección Integral de RECOPE, ha elaborado toda una estrategia tendiente a que en cada plantel existan Brigadas de Extinción, Primeros Auxilios, Brigadas de Rescate y Brigadas de Control de Derrames.

1) Ley N° 7227 del 22 de Abril de 1991, publicada en La Gaceta del 15 de Mayo de 1992. Aprobación de la Adhesión de Costa Rica al Convenio para la Protección y Desarrollo del medio Marino y su Protocolo de Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe

Esta ley abarca la aprobación de dos documentos jurídicos internacionales: Aprobación

de la Adhesión de Costa Rica al Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino, y su Protocolo de Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe.

El primero de ellos, realizado en Cartagena de Indias el 24 de marzo de 1983, no regula de manera específica lo relativo a la materia de interés para este apartado, o sea los combustibles, en virtud de que sus enunciados se refieren a la prevención, reducción y control de la contaminación, en sentido general, de lo que se denomina zona de aplicación del convenio. Sin embargo será de breve comentario como marco preliminar del Protocolo de Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe, que se analizará con mayor detalle.

En virtud de tales documentos las partes contratantes reconocen el valor económico y social del medio marino, su obligación de protegerlo, el peligro que representa la contaminación para este recurso, y la necesidad de cooperar entre las partes para asegurar un desarrollo coordinado y completo sin menoscabo del medio ambiente, entre otras consideraciones de interés.

La Zona de Aplicación del Convenio, según su artículo segundo, comprende el medio marino del Golfo de México, el mar Caribe, y las Zonas Adyacentes del Océano Atlántico al sur de los 30 grados de latitud norte y dentro de las 200 millas marinas de las costas atlánticas de los Estados invitados a participar en la Conferencia de Plenipotenciarios para la protección y desarrollo del Medio Marino.

Según dispone el Convenio las partes contratantes procurarán concertar acuerdos bilaterales o multilaterales para la protección del medio marino de la Zona de Aplicación del Convenio. El numeral cuarto establece como obligación de las partes el adoptar medidas para prevenir, reducir, y controlar la contaminación, en sentido genérico, de la Zona de Aplicación.

Los artículos quinto a noveno por su parte, de modo más específico, establecen la obligación de las partes contratantes de tomar medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación de la zona de aplicación causada por: descargas desde buques; vertimientos de desechos y otras materias en el mar desde buques, aeronaves, o estructuras artificiales en el mar; evacuación de desechos en las zonas costeras; descargas provenientes de ríos, estuarios, establecimientos costeros, instalaciones de desagüe; exploración y explotación de los fondos marinos y de su subsuelo, y descargas en la atmósfera.

Las medidas a tomar por las partes contratantes también incluyen la cooperación en casos de emergencia en materia de contaminación, que se produzcan en la zona de aplicación del Convenio, así como la obligación de notificar a los Estados que sufran inminente peligro de daños por tal contaminación.

Considera el Convenio la necesidad de realizar evaluaciones de impacto ambiental en relación con el posible impacto sobre el medio marino, de proyectos de desarrollo importantes,

a fin de prevenir consecuencias nocivas o una contaminación considerable.

El artículo quince señala que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es el designado para efectuar funciones de secretaría.

El Protocolo de este Convenio, relativo a la Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe, según su preámbulo, se fundamenta en el reconocimiento internacional de la partes contratantes del Convenio principal, de que las actividades de exploración, producción y refinación de hidrocarburos y su tráfico marítimo constituyen una amenaza de considerables derrames de hidrocarburos en la Región del Gran Caribe.

Por "incidente de derrame de hidrocarburos", se entenderá una descarga o amenaza substancial de descarga de hidrocarburos, sea cual fuere su causa de una magnitud que requiera una acción de emergencia inmediata para reducir sus efectos o eliminar la amenaza (art. 1º inciso 4). No compartimos esta definición legal en virtud de que equipara dos conceptos distintos: el incidente de derrame como descarga propiamente dicho, y la amenaza substancial de que tal situación ocurra.

La aplicación espacial y circunstancial del Protocolo, se limita a los incidentes de derrame de hidrocarburos que tengan como resultado la contaminación del medio marino y costero de la Región del Gran Caribe, o que afecten adversamente los intereses conexos de una o varias partes contratantes o constituyan un peligro considerable de contaminación.

Como obligaciones generales de las partes contratantes se establecen la adopción de medidas preventivas o correctivas, necesarias para la protección del medio marino y costero de la Región del Gran Caribe contra los incidentes de derrame de petróleo. Dichas medidas incluyen el establecimiento de medios para hacer frente a los eventuales incidentes de derrames de hidrocarburos, tales como promulgación de legislación pertinente, preparación de planes de emergencia, y designación de una autoridad responsable de la aplicación del protocolo.

Como obligaciones subsidiarias, se regula acerca del intercambio periódico de información en relación con las medidas que se adopten; la obligación de anunciar y notificar sobre los incidentes de derrames de hidrocarburos que puedan afectar los intereses de las demás partes contratantes, y la prestación de asistencia dentro de sus posibilidades, ante un incidente de los regulados por el convenio.

Señala las denominadas medidas operacionales a realizar ante un incidente de derrame de hidrocarburos, a saber:

- a) Proceder a una evaluación preliminar del incidente incluyendo el tipo y el alcance del impacto producido o probable de la contaminación.
- b) Comunicación de la la información del incidente.
- c) Determinar sin demora su capacidad para adoptar medidas eficaces para hacer frente al incidente.

- d) Celebrar las consultas pertinentes con las demás partes contratantes interesadas al determinar medidas necesarias para hacer frente al incidente.
- e) Adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir o eliminar los efectos del incidente, incluidas medidas de vigilancia de la situación.

Regula acerca de las disposiciones institucionales, y en tal sentido señala que el PNUMA en coordinación con la dependencia de Coordinación Regional, cuando se establezca, y en cooperación con la Organización Marítima Internacional:

- a) Preste asistencia en cuanto a preparación y actualización de los planes de emergencia y difusión de información sobre cursos y programas de capacitación a las partes contratantes.
- b) Preste asistencia en el plano regional a las Partes Contratantes, acerca de coordinación de medidas regionales destinadas a hacer frente a situaciones de emergencia y el establecimiento de un foro para debates relacionados con dichas medidas.
- c) Establezca y mantenga enlace con organizaciones regionales e internacionales competentes y entidades privadas apropiadas que operen en la Región, incluyendo los productores y refinadores de hidrocarburos, los contratistas y cooperativas para la limpieza de los derrames de hidrocarburos y los transportistas de tales productos.
- d) Mantener actualizado un inventario del equipo, material y expertos disponibles en la Región para situaciones de emergencia.
- e) Fomento de investigaciones de las partes contratantes, organizaciones internacionales y entidades privadas sobre el tema de derrame de hidrocarburos, incluyendo el impacto ambiental de los incidentes de derrame de hidrocarburos y el del empleo de materiales y técnicas de lucha contra tales derrames.
- f) Preparación de informes y otras funciones de Secretaría.

SECCION XII. Sanciones

Las disposiciones prohibitivas revisten mayor eficacia legal o impacto cuando la conducta prevista apareja una sanción para el infractor.

En relación con combustibles las sanciones están contenidas en las siguientes leyes:

1) Decreto Ejecutivo N° 16127-MIEM del 12 de febrero de 1985. Reglamento al artículo 443 del Código Fiscal. Autorización para la producción de alcohol con fines no licoreros

La autorización para producir o exportar alcohol, podrá ser cancelada por violación de las estipulaciones y/o incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, en el Reglamento o en la resolución de otorgamiento. Previo a declarar la caducidad, deberá conferirse audiencia a la parte involucrada.

Una de las causales para la cancelación de autorizaciones, es la contenida por el inciso segundo, cuando los desechos causan daño irreparable al ambiente por dolo, negligencia, imprudencia o impericia del concesionario. Una norma tan explícita, en relación con daños al

medio ambiente, merecería contener un rango mayor y una mayor definición de sanciones, dado que la forma en que tutela el tema es novedosa.

2) Decreto Ejecutivo N° 19164-MIRENEM-MEIC-TSS del 1° de agosto de 1989 y sus reformas. Creación de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible

cuando el MIRENEM, por recomendación de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible ha otorgado un permiso para la instalación y operación de las nuevas estaciones de servicio, deberá indicar el plazo en el cual debe iniciarse la construcción del nuevo expendio de combustibles.

Si la construcción no fuera iniciada en tal plazo, o se hiciera la obra violando las normas reglamentarias de construcción, seguridad e higiene, la autorización caducará sin ningún efecto. Tal plazo es de seis meses contados a partir de la fecha de publicación de la autorización en el Diario Oficial.

La autorización de venta de combustibles podrá ser cancelada por la Dirección General, previo procedimiento de verificación, según regula la Ley General de Administración Pública, en los siguientes casos:

- a) Obsolescencia del equipo o inconveniencia de la ubicación de los distribuidores de combustible, previa indemnización.
- b) Expendio doloso de combustibles adulterados.
- c) Fractura dolosa de marchamos.
- d) Descalibración dolosa de los equipos.
- e) Negativa y obstaculación a las labores de inspección y control por parte de la Dirección General.
- f) No se inicien las labores de construcción, según el plazo otorgado en la autorización respectiva.

Otra causal para tal cancelación es la regulada cuando dispone que los dueños, arrendatarios y administradores de las estaciones deberán dar un mantenimiento efectivo a las instalaciones. Si se incumple con alguna de las regulaciones de este decreto, la Dirección General le hará la prevención por escrito al transgresor, a efecto de que proceda a dar cumplimiento a su obligación, para lo cual se le otorgará un plazo máximo de 90 días.

3) Proyecto de Ley, Expediente N° 11438, publicado en la Gaceta N° 140 del 23 de julio de 1992. Aprobación del Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos de 1969, y sus protocolos de 1976 y 1984

Este proyecto recibió dictamen afirmativo de mayoría de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y de Recursos Naturales el 17 de marzo de 1993. Es iniciativa del Poder Ejecutivo. Al julio de 1995 el expediente se encuentra en el plenario legislativo.

De la revisión de dicho expediente puede concluirse que el Convenio tiene como antecedente, el suceso acaecido en el buque tanque Torrey Canyon, frente a la costa británica en marzo de 1967, que produjo un derrame de hidrocarburos del que se derivaron daños por contaminación de proporciones hasta entonces desconocidas. Ello hizo darse cuenta al mundo de la necesidad de contar con regímenes internacionales de responsabilidad civil nacida debido a contaminación por hidrocarburos.

Por ello, la Organización Marítima Internacional (OMI) convocó en 1969 a una conferencia diplomática que adoptó el primer instrumento, el cual consagra el principio de responsabilidad civil objetiva y estimula un sistema de seguro obligatorio para los propietarios o armadores de buques tanques.

El Convenio de 1969, se ha modificado por dos Protocolos; uno en 1976, cuyos cambios son de carácter formal; y en 1984, donde se realizan cambios fundamentales a los instrumentos suscritos con anterioridad.

El primer instrumento fue suscrito en Bruselas, el 29 de noviembre de 1969, entró en vigencia en 1975 y tiene como propósito fundamental adoptar a nivel internacional, las reglas y procedimientos que garanticen una indemnización suficiente a las personas que sufran daños causados por la contaminación resultante de derrames o descargas de hidrocarburos procedentes de los buques tanques que afecten al territorio de uno de los Estados Contratantes, incluido el mar territorial.

El primer Protocolo, suscrito en Londres el 19 de noviembre de 1976, entró en vigor el 8 de abril, modifica la unidad de cuenta aplicable utilizada en 1969 que era el "Franco Poincaré", basado en el valor oficial del dólar por una nueva unidad de cuenta, basada en los derechos especiales del giro (DEG) utilizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). A su vez, el Protocolo de 1984, adoptado el 25 de 1984, establece un nuevo procedimiento simplificado para modificar los límites de responsabilidad establecido con anterioridad a su existencia.

Con referencia a la situación de Costa Rica en la materia regulada por estos Convenios, hay que tener presente que nuestro país es eminentemente importador de hidrocarburos y la única empresa que los recibe es la RECOPE; y el transporte se realiza en su totalidad por vía marítima en buques de terceras banderas, básicamente la bandera liberiana y panameña. Por tal circunstancia, cualquier problema de derrame de hidrocarburos de un buque recaería sobre esta empresa y los propietarios o armadores de los buques no asumirían ninguna responsabilidad, situación que no se daría si nuestro país formara parte de esos convenios.

Por las razones descritas, y con el dictamen técnico favorable de la Dirección General de Transporte Marítimo del MOPT que considera de suma importancia para Costa Rica formar parte del citado Convenio y sus respectivos Protocolos mediante la adhesión a los mismos, el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República y del Ministro de Relaciones Exteriores solicitó a la Asamblea Legislativa tal adhesión.